



Radicado: U 2024080471709

Fecha: 05/12/2024

Tipo: AUTO

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA



AUTO No.

"Por medio del cual se deja sin efecto el Auto No. 2023080401072 del 05 de octubre de 2023, por medio del cual se declara abierto el periodo probatorio, se decreta pruebas y se corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión"

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA No.: 1334-2021

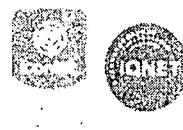
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: TIENDA EL PROGRESO
DIRECCIÓN DE LA APREHENSIÓN: VEREDA LA PIEDRA CARRERA 11
MUNICIPIO: GUATAPÉ – ANTIOQUIA
INVESTIGADA: SANDRA VIVIANA MARÍN RÍOS
IDENTIFICACION: C.C. 42.842.162

El Secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias consagradas en la Ley 223 de 1995, en la Ordenanza n.º 041 de 2020 *"Por medio de la cual se establece el estatuto de rentas del departamento de Antioquia"*, en concordancia con el artículo 24 y siguientes de la Ley 1762 de 2015, y las demás normas complementarias.

CONSIDERANDO.

- Que en este Ente de Fiscalización Departamental obra el expediente que da cuenta de la Actuación Administrativa No. 1334-2021, en el cual constan las diligencias y actuaciones administrativas relacionadas con el procedimiento administrativo sancionatorio por afectación al impuesto al consumo iniciado en contra de la señora SANDRA VIVIANA MARÍN RÍOS, identificada con cedula de ciudadanía n° 42.842.162.
- Dicho procedimiento tuvo origen en la visita de inspección y vigilancia efectuada el 09 de noviembre de 2021, por el Grupo Operativo de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, al Establecimiento de comercio abierto al público denominado TIENDA EL PROGRESO, ubicado en la Vereda La Piedra Carrera 11, del municipio de Guatapé - Antioquia, mediante el cual se le realizó aprehensión de la mercancía que a continuación se discrimina, a la señora SANDRA VIVIANA MARÍN RÍOS, con cedula de ciudadanía n° 42.842.162, por tratarse de cigarrillos por los cuales no se presentó declaración ni se acreditó el pago del impuesto al consumo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 207 y 215 de la Ley 223 de 1995, los artículos 2.2.1.2.1. y 2.2.1.2.15. del Decreto No. 1625 de 2016 y artículo 146, numeral 4, literal a), Ordinal I, V y VII de la Ordenanza No. 041 de 2020.
- El Acta de Aprehensión No. 2021 0590 1504 del 09 de noviembre de 2021, se consolidó en la actuación administrativa No. 1334-2021.
- La mercancía aprehendida en la mencionada diligencia fue la siguiente:

n.º	TIPO DE MERCANCÍA	MARCA	PRESENTACIÓN	TOTAL DECOMISADO
-----	-------------------	-------	--------------	------------------



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA

AUTO No.

1.	Cigarrillos	Rumba	Cajetilla x 20	10
2.	Cigarrillos	Última	Cajetilla x 20	08
3.	Cigarrillos	Kentu C K Y	Cajetilla x 20	05
4.	Cigarrillos	Win	Cajetilla x 20	01
TOTAL				24

5. En la presente Actuación Administrativa reposan como elementos de convicción los siguientes documentos, los cuales conducen a inferir la existencia de una contravención al Estatuto de Rentas del departamento de Antioquia.
 - 5.1. Acta de Aprehensión No. 202105901504 del 09 de noviembre de 2021, la cual permite inferir la existencia de una contravención del Estatuto de Rentas del Departamento de Antioquia.
 - 5.2. Certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación correspondiente a la señora SANDRA VIVIANA MARÍN RÍOS identificada con la cédula de ciudadanía n.º 42.842.162.
 - 5.3. Consulta realizada en el Registro Único Empresarial y Social - RUES - correspondiente a la señora SANDRA VIVIANA MARÍN RÍOS identificada con la cédula de ciudadanía n.º 42.842.162.
 - 5.4. Copia del certificado de la base gravable por cajetilla de 20 unidades, para la liquidación del componente *ad valorem* del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado durante el año 2021, expedido por el DANE.
 - 5.5. Informe de Averiguaciones Preliminares con radicado No. 2022020023265 del 10 de junio de 2022.
6. Mediante el Auto No. 2023080037638 del 01 de marzo de 2023, el Ente de Fiscalización Departamental resolvió iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio por afectación al impuesto al consumo en contra de la persona natural en mención, para establecer los hechos u omisiones que constituyen infracción a la Ley 1762 de 2015 y a las normas que regulan las rentas departamentales, en especial las alusivas al impuesto al consumo, de la siguiente manera:

"ARTÍCULO SEGUNDO: Formular contra la señora SANDRA VIVIANA MARÍN RÍOS identificada con la cédula de ciudadanía n.º 42.842.162 los siguientes cargos:

CARGO PRIMERO: *No contar con declaración ni acreditar el pago del impuesto al consumo de los cigarrillos que fue objeto de aprehensión el dia 09 de noviembre de 2021 en la visita de inspección y vigilancia efectuada por el Grupo Operativo de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia, en presunta contravención de lo dispuesto por los artículos 207y 215 de la Ley 223 de 1995, los artículos 2 2 1 2 1 y 2 2 1 2 15 del Decreto No. 1625 de 2016, y el numeral 4. literal a). Ordinal I. V y VII del artículo 146 de la Ordenanza No. 041 de 2020 "*

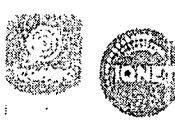
7. En Auto No. 2023080401072 del 05 de octubre de 2023 el Ente de Fiscalización Departamental resolvió declarar abierto el periodo probatorio por el término de un (1) día hábil, contado a partir de la notificación del auto en mención, y una vez vencido dicho término corriendo traslado para la presentación de los alegatos de conclusión, sin que haya culminado el proceso de notificación.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

AUTO No.

8. Posteriormente se prorifique Auto No. 2023080401360 del 12 de octubre de 2023, por medio del cual se apertura el periodo probatorio, se decreta pruebas y se corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión, acto administrativo el cual se encuentra debidamente notificado.
 9. Al revisar íntegramente el expediente que contiene la presente investigación de carácter sancionatoria, se evidencia que por error se expedieron dos autos, el N° 2023080401072 del 05 de octubre de 2023 y el 2023080401360 del 12 de octubre de 2023, por medio del cual se apertura el periodo probatorio, se decreta pruebas y se corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión, donde una solo fue debidamente notificada.
 10. Teniendo en cuenta lo anterior, el Auto No. 2023080401072 del 05 de octubre de 2023, deberá ser revocado, por encontrarse duplicado.
 11. En consecuencia, el Auto No. 2023080401360 del 12 de octubre de 2023, tendrá plena validez dentro del presente proceso sancionatorio.
 12. El artículo 29 de la Constitución Política Nacional dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en las actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T - 391 de 1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales para agotar el respectivo trámite.
 13. El debido proceso se ve afectado cuando el funcionario judicial o el instructor del procedimiento administrativo sancionatorio se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso distinto al aplicable o porque omite una etapa sustancial del mismo, lo cual desconoce el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. De acuerdo con la Sentencia SU -159 de 2002, este último evento se presenta cuando la ausencia de una etapa procesal o de alguna formalidad desconoce las garantías previstas en la ley para los sujetos procesales, de forma tal que, por ejemplo, se impide que: *"(i.) puedan ejercer el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la asesoría de un abogado - en los eventos en los que sea necesario - ejercer el derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles notificadas"*, entre otras.
 14. En este sentido, la Corte ha señalado que en todo proceso judicial o administrativo es constitucionalmente imperioso que la persona contra la cual se dirige un cargo o acusación pueda hacer frente a los reproches formulados en su contra y que los argumentos que presente se consideren en la respectiva actuación judicial o administrativa, pues esto no sólo sirve al interés individual del mismo, sino también al esclarecimiento de la verdad.





DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

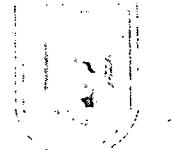
AUTO No.

15. De ahí que, independientemente de que la actuación administrativa se inicie en cumplimiento de un deber constitucional o de oficio, todas las garantías constitucionales son exigibles, pues ese hecho no afecta su naturaleza, ni podrá entenderse que los obligados tengan restricciones en cuanto al contenido y alcance del derecho al debido proceso administrativo, por lo que corresponde a las autoridades promover y garantizar los derechos de las personas (artículo 2º de la C.P.). En efecto, uno de los contenidos del derecho al debido proceso se circunscribe a que las personas conozcan y comprendan el trámite administrativo en el que se encuentran involucradas.

16. Por tanto, las autoridades administrativas deben garantizar en virtud del derecho al debido proceso, principios como el de legalidad, contradicción, defensa y que se conozcan las actuaciones de la administración, de cuya aplicación se derivan importantes consecuencias para las partes involucradas en el respectivo proceso administrativo. Así lo expuso la **Sentencia C-331 de 2012**: "(i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. Igualmente, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares".

"Desde la perspectiva de los asociados, de este derecho se desprenden las garantías de (i) conocer las actuaciones de la administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas; (iii) ejercer con plenitud su derecho de defensa; (iv) impugnar los actos administrativos, y (v) gozar de las demás garantías establecidas en su beneficio. En lo que respecta a la administración, todas las manifestaciones del ejercicio de la función pública administrativa se encuentran cobijadas por el debido proceso, tales como (i) la formación y ejecución de actos administrativos; (ii) las peticiones presentadas por los particulares; y (iii) los procesos que se adelanten contra la administración por los ciudadanos en ejercicio legítimo de su derecho de defensa". (Subraya fuera de texto).

17. Cabe resaltar que, para ejercer el derecho a la defensa de forma material y no solo formal, es indispensable que la persona tenga conocimiento de la actuación administrativa, de las etapas en las que se desarrolla la misma y su alcance. Una de las garantías mínimas del debido proceso es el ejercicio de defensa y contradicción, a ser oido y a promover la nulidad de aquéllas que se obtienen con violación al debido proceso.
18. Aunado a lo anterior, el ejercicio de la función administrativa por parte de la Autoridad de Fiscalización Departamental, deberá garantizar que en todas sus actuaciones se respeten y se observen íntegramente los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad para en procura del orden e interés general.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

AUTO No.

razón por la cual, la situación descrita anteriormente atenta directamente contra los principios mencionados.

En mérito de lo expuesto, la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia,

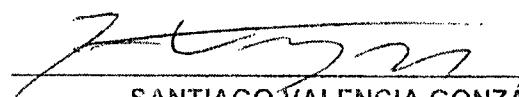
DISPONE.

ARTÍCULO PRIMERO. DEJAR SIN EFECTO el Auto No. 2023080401072 del 05 de octubre de 2023 por el cual se apertura el periodo probatorio, se decreta pruebas y se corre traslado para la presentación de alegatos de conclusión, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el presente Acto Administrativo acorde lo establece los artículos 565 y siguientes del Estatuto Tributario a la investigada o a su apoderado legalmente constituido quien deberá acreditar la calidad conforme lo prevé la Ley.

ARTÍCULO TERCERO: Indicar que contra la presente actuación administrativa no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1762 de 2015

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE



SANTIAGO VALENCIA GONZÁLEZ
SECRETARIO DE HACIENDA

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyecto:	Michelle Katherine Arango Cardona / Abogada Apoyo de Sustanciación	11/11/2024	20/11/2024
Revisó:	Juan José Ríos / Abogado Apoyo de Sustanciación	11/11/2024	20/11/2024
Revisó:	Diego Humberto Aguirre Acevedo / Abogado de Despacho	11/11/2024	26/11/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y los encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

